



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-011-2021-00406-01
Demandante:	Claudia Yaneth Valencia Pérez
Demandado:	AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E.
Asunto:	Apelación y Consulta de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Ineficacia afiliación al RAIS

Medellín, mayo cuatro (04) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, con ausencia justificada, y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones E.I.C.E., así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la misma entidad, únicamente en los aspectos no fueron objeto del recurso de alzada, respecto de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2023 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Claudia Yaneth Valencia Pérez contra la AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-05-011-2021-00406-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora Claudia Yaneth Valencia Pérez convocó a juicio a las AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo se declare la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual; se ordene a la AFP Protección S.A. autorizar su retorno a Colpensiones E.I.C.E., y trasladar los aportes efectuados con los rendimientos financieros generados; se ordene a Colpensiones E.I.C.E., aceptar la devolución de los aportes ordenados, y recibirla nuevamente como afiliada, sin solución de continuidad; se condene a Colpensiones E.I.C.E. al reconocimiento de la pensión de vejez, a partir del momento en que cumplió los requisitos legales, y al pago del retroactivo pensional y los intereses de mora causados.

En respaldo de tales pedimentos se indicó que la señora Claudia Yaneth Valencia Pérez nació el 22 de mayo de 1966, que fue afiliada por su primer empleador al Instituto de Seguros Sociales en el mes de julio de 1985, que posteriormente fue contactada por un asesor comercial de la AFP Protección S.A., a fin de convencerla del traslado de fondo de pensiones, con una deficiente, incompleta, engañosa, superficial y vacilante explicación de los pormenores de su concreta situación pensional, teniendo en cuenta que no le explicó los requisitos para acceder a la pensión de vejez, ni las consecuencias del traslado, y siendo omisiva la AFP Protección S.A. en brindarle, como era su obligación, una re-asesoría pensional antes del cumplimiento de los 47 años de edad.

1.2.- CONTESTACIÓN

Al replicar la demanda, **COLPENSIONES E.I.C.E.** aceptó como cierta la fecha de nacimiento de la demandante y la afiliación de la misma al ISS; dijo que no le constaban los demás hechos, siendo que los dichos, faltas u omisiones de las administradoras de pensiones o de sus asesores comerciales, resultan exógenas al conocimiento de la entidad. Se opuso a las pretensiones de la demanda y

formuló las excepciones de improcedencia de la declaratoria de ineficacia o nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual; prevalencia de la autonomía de la voluntad privada; prescripción; imposibilidad de condena en costas y compensación.

Por su parte, la **AFP PROTECCIÓN S.A.** aceptó la fecha de nacimiento de la pretensora y afirmó que no era cierto lo narrado en relación a su afiliación a la entidad, toda vez que sus asesores son capacitados permanentemente y cuentan con el conocimiento técnico y la lealtad moral suficiente para orientar a los posibles afiliados, y en esa medida, sostuvo que la actora fue asesorada respecto de todo el Sistema General de Pensiones, oportunidad en la que se le explicaron las características del RAIS y del RPMD, las diferencias de ambos, la forma de adquirir la pensión en uno y otro, las consecuencias del traslado y todos los aspectos necesarios para que pudiera tener claridad frente a su panorama pensional y pudiera tomar libremente la decisión de vincularse o no, sin omitir información alguna, y cumpliendo con las disposiciones vigentes para la época.

En oposición al éxito de las pretensiones formuló las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir; buena fe; prescripción; aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones; inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación; inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe; y la innominada o genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 27 de marzo de 2023, declaró la ineficacia de la vinculación de la señora Claudia Yaneth Valencia Pérez al Régimen de Ahorro Individual; ordenó a la AFP Protección S.A., a trasladar al Régimen de Prima Media los aportes de la demandante, como son cotizaciones, gastos de administración, primas de los

seguros de invalidez y sobrevivencia, porcentajes correspondientes al fondo de garantía de pensión mínima, con todos sus frutos e intereses, prima del reaseguro de Fogafín y los aportes al fondo de solidaridad pensional; ordenó a la AFP Protección S.A., indexar los dineros a devolver por gastos de administración, esto es, los costos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, además del porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, la prima de reaseguro de Fogafín y los aportes al fondo de solidaridad, sin aplicar equivalencia alguna; ordenó a Colpensiones E.I.C.E. recibir las sumas trasladadas del Régimen de Ahorro Individual, y reactivar la vinculación de la accionante al Régimen de Prima Media, sin solución de continuidad; declaró no prospera la excepción de prescripción; absolvió a las entidades demandadas de las demás pretensiones incoadas; y condenó en costas a la AFP Protección S.A. y Colpensiones E.I.C.E.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de **COLPENSIONES E.I.C.E.**, presentó recurso de apelación, solicitando se revoque la condena en costas en contra de su prohijsada, argumentando que la misma solo fue llamada con el fin de recibir los aportes, y tener como afiliada a la demandante, y en un futuro, de cumplirse con los requisitos normativos, reconocer la pensión de vejez, esto es, la orden impartida a la entidad, es solo corresponde a la consecuencia lógica de la declaratoria de ineficacia.

Además, señaló que si bien la condena en costas es una erogación económica que le corresponde asumir a la parte vencida en juicio, en este caso la litis tuvo su origen en que la administradora del RAIS no cumplió con la obligación de dar una debida información a la parte demandante, no estando probado que en el acto de traslado hubiera existido responsabilidad alguna por parte de la entidad que representa, la cual ha obrado conforme a derecho.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció el apoderado de Colpensiones E.I.C.E., a fin de reiterar la solicitud de revocatoria parcial de la sentencia, y en su lugar, se absuelva a la entidad de la condena en costas.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma, procede la consulta en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone *“También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”*.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que la señora Claudia Yaneth Valencia Pérez nació el 23 de mayo de 1966, tal y como se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 1 del anexo 003 del expediente digital.
- Que la actora se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con la Solidaridad, a través de la AFP Protección S.A., el día 1º de

junio de 1997, con fecha de efectividad 1° de agosto de la misma anualidad, de conformidad con formulario de afiliación obrante a folios 65 del anexo 003 del expediente digital.

- Que la accionante acredita un total de 1292,43 semanas cotizadas, de acuerdo con la historia laboral generada por Protección S.A., el 24 de enero de 2022, glosada a folios 59 a 76 del anexo 008 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si la sentencia proferida en el proceso de la referencia se encuentra ajustada a derecho, efecto para el que habrá que determinar si el traslado efectuado por la demandante el 01 de junio de 1997, desde el Régimen de Prima Media hacia el Régimen de Ahorro Individual, a través de la AFP Protección S.A.; adolece de ineficacia?

¿Si es procedente la condena en costas impuesta en la primera instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E.?

2.4.- TESIS DE LA SALA

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, (i) es ineficaz el acto jurídico de traslado por incumplimiento del deber de información, razón por la cual, debe ordenarse el traslado de todos los conceptos que afectaron el valor de la cotización obligatoria de la demandante, y (ii) no procede la condena en costas respecto de Colpensiones E.I.C.E., siendo que la misma no tuvo injerencia en la afiliación sobre la que recae la declaratoria de ineficacia; en consecuencia, la sentencia de primera instancia debe ser REVOCADA en su numeral quinto y CONFIRMADA en todo lo demás.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

El modelo pensional adoptado en Colombia a través de la Ley 100 de 1993, permitió la concurrencia de dos regímenes pensionales, excluyentes, el régimen público de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el extinto Instituto de Seguros Sociales y algunos Fondos y Cajas de Previsión del sector Público y el Régimen de Ahorro Individual administrado por los Fondos Administradores de Pensiones, entidades financieras de carácter privado (artículo 12).

El Régimen de Prima Media está caracterizado en los artículos 31 y 32 de la Ley 100 de 1993, como un régimen en el cual las prestaciones que obtienen los afiliados o sus beneficiarios están previamente definidas por el legislador, donde los aportes de todo los afiliados constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se financia las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia y en el cual el Estado es quien tiene a su cargo la garantía de las pensiones a que se hacen acreedores los afiliados en este régimen, que se concreta a través del subsidio estatal.

Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual, tal como lo define el artículo 59 del estatuto general de pensiones, está fundamentado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, el reconocimiento de la pensión y el monto de la misma está determinado por el capital acumulado, que debe ser el necesario para financiar una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente para 1994 y reajustado anualmente según la variación porcentual de IPC. La solidaridad opera en relación con la garantía de la pensión mínima legal, que da derecho a que el Estado complete la parte que haga falta para financiar una pensión mínima de vejez.

En este contexto de dualidad, el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, establece la libertad de selección de régimen como característica del Sistema General de Pensiones de la siguiente manera “... *la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestara por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El*

empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1° del artículo 271 de la presente ley”.

A su vez, el artículo 271 ibidem establece que: *“El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.*

El deber de brindar información completa, comprensible y veraz de las administradoras de Fondos de Pensiones, es consustancial a la actividad de estas entidades de carácter financiero y así fue establecido desde la vigencia misma del Régimen de Ahorro Individual, por el artículo 97 del estatuto financiero vigente para la época, Decreto 663 de 1993, el artículo 4 del Decreto 656 de 1994 y los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

Posteriormente, el legislador ha regulado el contenido de la información que debe ser brindada a los potenciales afiliados, por parte de los Fondos de Pensiones; véase la Ley 1328 de 2009, el Decreto Reglamentario 2555 de 2010, la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular 016 de abril 16 de 2016 de la Superintendencia Financiera, dentro del cual se incluye las reglas de funcionamiento, ventajas y desventajas de ambos regímenes, el análisis de la situación particular del afiliado, proyecciones financieras de la futura pensión y la obligatoriedad de la doble asesoría para eventos de traslado.

En esta misma dirección, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha consolidado una línea jurisprudencial reiterada y uniforme, en torno al deber permanente e ineludible de información que concierne a las administradoras

pensionales, como condición de eficacia de la afiliación inicial o el traslado de régimen; según la cual la afiliación desinformada produce la ineficacia del acto; correspondiendo a las AFP la carga probatoria de demostrar que entregaron al afiliado la información objetiva sobre la actividad de cada uno de los regímenes pensionales, para obtener un verdadero consentimiento.

Dan cuenta del precedente en referencia, los siguientes pronunciamientos SL, Rad, 31989 del 08 de septiembre de 2008; SL Rad. 31314 del 08 de septiembre de 2008; SL, Rad 33083 del 22 de noviembre de 2011; SL31314 del 06 de diciembre de 2011, SL 19447 del 27 de septiembre de 2017; SL 17595 del 19 de octubre de 2017, SL 413 del 21 de febrero de 2018; SL4964 (54814) del 14 de noviembre de 2018; SL 4989 del 14 de noviembre de 2018, SL 1452 del 03 de abril de 2019; SL1421 del 10 de abril de 2019; SL1688 del 08 de mayo de 2019; SL 1689 del 08 de mayo de 2019; SL3464 del 14 de agosto de 2019; SL 4360 del 09 de octubre de 2019; SL4426 del 16 de octubre de 2019; SL1611 del 01 de julio de 2020; SL 2877 del 29 de julio de 2020; SL SL1442 del 21 de abril de 2021; SL3349 del 07 de julio de 2021; SL5252 del 24 de noviembre de 2021, SL1017 del 23 de marzo de 2022, SL1498 del 27 de abril de 2022, SL1637 del 11 de mayo de 2022 y más recientemente en las sentencias, SL113 del 31 de enero de 2023, SL178 del 07 de febrero de 2023, SL397 del 01 de marzo de 2023, entre muchas otras.

De acuerdo con la *ratio decidendi* de las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es indiscutible que, para resolver el problema jurídico atinente a la validez o eficacia de las afiliaciones al Régimen de Ahorro Individual, debe aplicarse las dos sub reglas principales establecidas por el máximo Tribunal de la jurisdiccional ordinaria laboral, esto es i) el deber profesional, permanente e ineludible de información que tienen las administradoras de pensiones y ii) la inversión de la carga de la prueba, que les traslada la responsabilidad de acreditar que entregaron al afiliado la información necesaria para adoptar una decisión consciente.

2.6.- CASO CONCRETO

En el caso concreto, se tiene por establecido el traslado de la señora Claudia Yaneth Valencia Pérez del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, a través de la AFP Protección S.A., el 01 de junio de 1997, con de efectividad a partir del 01 de agosto de la misma anualidad, de conformidad con formulario de afiliación obrante a folios 65 del anexo 003 del expediente digital, no obstante, el referido documento no da cuenta de la información brindada a la accionante, tal y como lo ha indicado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“Como en muchísimas ocasiones lo ha sostenido esta Corte, dicha carga no se supe con la firma del formulario o porque en el mismo se utilicen leyendas o afirmaciones tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares. Esos formalismos, a lo sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado”* (sentencia SL3871 de 2021); y es por ello que del simple formulario de afiliación no puede inferirse la voluntariedad informada del traslado, en los términos del artículo 11 del Decreto 692 de 1994.

Además, del interrogatorio practicado a la demandante no se deriva prueba de confesión, en tanto que la misma indicó que en el año 1997 trabajaba para la empresa “Video Base”, y en cualquier momento les dejaron desde la jefatura de la oficina el documento para pasarse al fondo privado, el cual suscribió, sin que hubiera recibido información o acompañamiento por parte de la AFP Protección S.A., ni siquiera en un momento posterior.

Corolario de lo anterior, es claro que, si bien la gestora del proceso se trasladó de forma libre y voluntaria, ello lo hizo sin haber recibido ninguna información, ni acompañamiento de la AFP Protección S.A., desconociendo las características, funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual, consecuencias del traslado, ni las desventajas de dicho régimen pensional, así como tampoco conocía del Régimen de Prima Media.

Aunado a lo que se viene diciendo, advierte esta Colegiatura que no existe medio de convicción alguno, a partir del cual pueda establecerse que la AFP Protección S.A., cumpliera con el deber profesional de información, para garantizar la

decisión libre, voluntaria e informada de la afiliada, sobre las implicaciones del traslado, tal y como lo reclama la pretensora.

En este escenario probatorio, esto es, ante la ausencia de medios de prueba que den cuenta de la información que brindó la AFP Protección S.A. a la demandante al momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, no era posible una decisión distinta a la declaratoria de la ineficacia de su afiliación a dicha administradora.

De los efectos de la ineficacia del traslado de régimen pensional

La ineficacia supone que el acto no produce efectos jurídicos, como si no hubiese existido, por lo tanto, no pueden excluirse del traslado, las comisiones de administración, los seguros previsionales, ni los aportes al Fondo de Garantía Mínima, teniendo en cuenta que estos afectaron el valor de la cotización de la demandante y al ser declarada la ineficacia, los pagos y deducciones, quedan sin causa jurídica, debiéndose trasladar el aporte completo al Régimen de Prima Media, para garantizar el financiamiento de la futura pensión de la actora.

Y es que además, no podría afectarse el fondo común de naturaleza pública del Régimen de Prima Media, con la disminución de la cotización en favor de la administradora del fondo privado accionada, teniendo en cuenta, que fue quien dio lugar a la sanción del acto jurídico, en virtud del incumplimiento al deber de información y siendo ésta, la entidad en la cual se encuentra vigente la afiliación de la actora, por lo tanto, debe asumirlo aun de su propio patrimonio, conforme al artículo 963 del Código Civil.

De otra parte, los rendimientos financieros generados mientras estuvo activa la afiliación, son de propiedad de la demandante y no de los Fondos Privados, aunado a ello, tampoco resultan ajenos al régimen administrado por Colpensiones E.I.C.E., conforme al literal b) del artículo 32 de la Ley 100 de 1993, dado que el fondo común también se integra por rendimientos de las

cotizaciones de los afiliados y por lo tanto no pueden compensar los gastos administrativos.

Los aportes al fondo de garantía mínima, cuya aplicación es exclusiva del Régimen de Ahorro Individual, deben ser trasladados conforme al artículo 7º del Decreto 3995 del 2008 y las sentencias SU 062 de 2010 y SU 130 de 2013, destacando que la diferencia entre el ahorro y la cotización cuando se trata de traslado permitido legalmente, debe ser asumida por el afiliado, no así, cuando, como en el sub lite, se trata de la sanción al acto jurídico por incumplimiento de la AFP al deber de información.

En cuanto a los porcentajes de seguros previsionales, si bien los mismos ampararon los riesgos de invalidez y muerte en vigencia de la afiliación de la pretensora, también generaron la disminución de la cotización y al quedar sin efecto la afiliación, también deben ser trasladados, siendo claro que, al no estar estos conceptos dentro de la cuenta de ahorro individual de la demandante, deben ser trasladados con cargo a los propios recursos de la AFP demandada y por lo tanto no afectan los pagos realizados a la respectiva aseguradora.

Respecto a los conceptos que deben ser trasladados como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado al RAIS, se pronunció recientemente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2877-2020, indicando:

“Ahora, el restablecimiento debe ser pleno o completo, si el tipo de obligación contraída así lo permite y, por tanto, dependiendo de las circunstancias específicas de cada asunto, deben definirse tales restituciones mutuas, ejercicio que, en su labor de dispensar justicia, debe ser analizada detalladamente por el juez en cada caso en particular”

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el Régimen de Prima Media. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”

Similar postura se sostuvo en la sentencia SL 3034 de 2021:

“Resultan suficientes las consideraciones vertidas en sede extraordinaria para denegar prosperidad a la alzada y al surtir el grado jurisdiccional de consulta, se advierte que el restablecimiento pleno o completo, como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los términos de la sentencia CSJ SL2877-2020, requiere especificar y detallar algunas de las condenas impartidas por el a quo, razón por la cual se procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, el 03 de diciembre de 2018, precisando y adicionando el ordinal segundo en el sentido de que Old Mutual SA, además, deberá trasladar a Colpensiones, lo recaudado por comisiones y gastos de administración debidamente indexados durante todo el tiempo que la accionante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el fondo de garantía de pensión mínima”.

De la indexación de los conceptos a trasladar

Cumple memorar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL 5236, SL 5285, SL5337, SL5525, SL5543 de 2021 y SL950 de 2022, ha adoctrinado que la indexación de los descuentos objeto de devolución, como lo son las comisiones de administración, los aportes al Fondo de Garantía Mínima y las cuotas por seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia que debe reintegrar la AFP, es un efecto inherente a la declaratoria de ineficacia, con el cual se busca no afectar la estabilidad financiera de Colpensiones, razón por la cual resulta procedente la condena por este concepto, tal y como lo ordenó el *a quo*.

Conforme a lo anterior, encuentra procedente la Sala confirmar la decisión de primera instancia, precisando que, si bien esta Magistratura ha sostenido que en

este tipo de litigios no procede la devolución de las primas del reaseguro Fogafin, ni los aportes para el fondo de solidaridad pensional, no hay lugar a revocar dicha orden, en tanto que no fue objeto de reparo.

De la condena en costas

Finalmente, en cuanto a la inconformidad planteada respecto de la condena en costas, ha sostenido esta Sala de Decisión que Colpensiones E.I.C.E. es un tercero de buena fe respecto del acto jurídico del cual se predica la ineficacia, debiendo comparecer a este tipo de litigios para atender las pretensiones relativas a la reactivación de la afiliación y recepción de los dineros a trasladar, que corresponden a pretensiones consecuenciales a la ineficacia, razón por la cual no es procedente condenarla en costas, en virtud de ello, se revocará parcialmente la sentencia opugnada, para en su lugar abstenerse de imponer condena en costas a Colpensiones E.I.C.E.

Sin costas en esta instancia, en atención a la prosperidad del recurso de alzada.

3.- DECISIÓN

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se REVOCA PARCIALMENTE el numeral quinto de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2023 por el Juzgado Once Laboral de Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Claudia Yaneth Valencia Pérez contra la AFP Protección S.A., y Colpensiones S.A., en cuanto gravó en costas a Colpensiones E.I.C.E., y en su lugar, se absuelve a la referida entidad de dicha condena.


2.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la providencia confutada.

3.- Sin Costas en esta instancia.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

(Sin firma por ausencia justificada)